

¿Qué está pasando en Italia?

Tres frentes de dificultad han aflorado últimamente en Italia hasta el referéndum del 18 de abril. El primero es la corrupción política, sacada a flote por la judicatura con la operación «Manos limpias»; el segundo, el freno a la actividad económica del país, provocado en parte por el descubrimiento de las «tangentes» entre políticos y empresarios; y el tercero, el protagonismo de la delincuencia organizada, alrededor de la «Cosa nostra». El autor, buen conocedor de la situación italiana, desde el observatorio de *La Civiltà Cattolica*, analiza esta triple cuestión, y se aventura a vaticinar una nueva época para la andadura política italiana.

Giuseppe de Rosa, S.J.*

PARA los extranjeros, incluso para aquellos que llevan ya en Italia algunos años, no es fácil comprender qué es lo que está pasando en este país en el ámbito político. Porque no

* Redactor de *La Civiltà Cattolica*. Roma.

siempre lo que «aparece» es lo que de verdad sucede. Estos meses la dificultad para comprender se acentúa especialmente. Muchos y no sólo en el extranjero sino en Italia se preguntan: ¿Qué está pasando en Italia en este 1993 y cuáles son las perspectivas para el futuro en este extraño país? Intentaré responder a estas preguntas asumiendo como punto de partida mis reflexiones de fecha reciente —18 de abril de 1993— en las cuales me parece poder ver el final de una época histórica comenzada hace 50 años y el punto de partida de una época nueva de la historia italiana.

18 de abril: un voto para cambiar el país

¿QUÉ pasó el 18 de abril de 1993? Algo muy sencillo pero de un gran significado: se ha votado en ocho referendos relativos a materias diversas. En Italia el referéndum popular es únicamente derogativo, es decir, no puede proponer una opción política o nuevas leyes sino sólo la derogación de una ley ya existente. De los ocho referendos sometidos el 18 de abril al voto de los italianos, dos tenían una importancia especial: con uno se pretendía cambiar el sistema de elecciones del Senado, sustituyendo el actual sistema proporcional por el sistema mayoritario uninominal (actualmente vigente en Inglaterra y en Francia); con el otro se pretendía abolir la financiación de los partidos políticos por parte del Estado. Los dos referendos habían sido presentados por aquellos que los habían propuesto como el instrumento para cambiar radicalmente el rostro político del país —es decir, poner fin a la «primera República»— dominada por los partidos y por una clase política corrompida, y dar comienzo a la «segunda» República en la cual los partidos quedaran limitados a las funciones y términos establecidos en la Constitución italiana.

El hecho de que el 18 de abril se acercaran a votar el 77 por 100 de los electores y de que el primer referéndum alcanzara el 82,7 por 100 favorables y el segundo el 90,3 por 100 era prueba evidente de que el pueblo italiano deseaba un cambio político profundo y no alentaba confianza en los partidos ni en la clase política que hasta ahora había gobernado el país. ¿Cómo se había llegado a este clima de desconfianza? Por una ya larga tradición histórica los italianos no han amado especialmente a la clase política. No hay que maravillarse por tanto de que, hoy como ayer, ésta se haya convertido en blanco de críticas ásperas. Pero hay un hecho

reciente que ha descalificado a la clase política ante la opinión pública y ha sido la investigación de la magistratura que, al hacer indagaciones sobre las contratas de las obras públicas, ha hecho subir a la superficie una vastísima red de corrupción en el ámbito político administrativo y en el industrial y con ello ha puesto bajo sospecha a un gran número de políticos, administradores e industriales.

La investigación de la magistratura: «Manos limpias»

TODO comenzó por casualidad el 17 de febrero de 1992 en Milán, cuando un fiscal-sustituto de la República en Milán, un tal Antonio Di Pietro, hasta entonces del todo desconocido, hizo arrestar al administrador de un gran instituto de atención a los ancianos, el socialista Mario Chiesa, sorprendido en el acto de recibir la suma de 7 millones de liras de un pequeño proveedor del instituto dirigido por él. En realidad aquella pequeña suma era una «tangente» (con esta palabra se indican dos cosas: 1) la suma de dinero que un político o un administrador local o también un partido político en el poder busca o exige de un contratista o un proveedor de servicios, a cambio de agilizar la adjudicación de obras públicas a realizar o el suministro de bienes y de servicios a los entes públicos; 2) la suma de dinero que un contratista o un proveedor de bienes y servicios paga más o menos espontáneamente a un político, a un administrador local o a un partido para ser preferido en la concesión de las contratas de obras públicas o en el suministro de bienes y servicios, de forma que pueda obtener un trabajo seguro sin tener que someterse al concurso de adjudicación y, sobre todo, poder trabajar sin riesgos y sin tener que exponerse a la concurrencia.

Comenzando por Mario Chiesa, la investigación judicial denominada significativamente «Manos limpias» se extendió enormemente, envolviendo a los dos últimos alcaldes socialistas de Milán, a muchos políticos, sobre todo dirigentes, del Partido Socialista Italiano (PSI), de la Democrazia Cristiana (DC), del Partido Democrático de la Izquierda (PDS; antes PCI) y de otros partidos menores. Afectaba también a la mayor parte de las grandes empresas e industrias de construcción y servicios de la ciudad de Milán, que se hizo así acreedora del título de «Tangentópolis» (Ciudad de las «tangentes»). Para los políticos y administradores la acusación era

de «extorsión» (se comete el delito de extorsión cuando un oficial público, abusando de sus funciones, obliga o induce a una persona a la entrega indebida de dinero). Para los contratistas la acusación era de «corrupción» (el delito de corrupción se comete cuando se ofrece dinero a un funcionario público para obtener un favor ilícito). Además, para los dirigentes de partidos políticos que buscan «tangentes» para los propios partidos a cambio de favores, la acusación era de violación de una ley de 1974, que prohíbe a los partidos recibir financiación «oculta», no registrada debidamente en las cuentas de las empresas.

A ejemplo de los jueces milaneses otros fiscales de la República comenzaron a hacer investigaciones en otras regiones italianas. Así se descubrió que no se trataba de una serie, aunque fuese larga, de delitos de extorsión, corrupción y financiación ilegal de los partidos, sino de todo un auténtico «sistema de tangentes» que había invadido toda la península, desde las grandes ciudades a los pequeños núcleos de población. Se descubrió sobre todo que este sistema era la «regla» en la adjudicación de contratos de las obras públicas o en los grandes entes públicos, pertenecientes al Estado, los cuales se habían convertido así en los grandes financiadores de los partidos. Estos a su vez habían colocado en todos los entes públicos algunos enlaces con la finalidad precisa de conseguir tangentes. En realidad los partidos políticos se habían convertido en organizaciones elefánticas que para pagar sus sedes, la propaganda, los periódicos, las campañas electorales necesitan grandes sumas de dinero. Para conseguirlo no quedaba otro medio sino el de hacerse pagar los favores que los «señores» de los entes públicos podían hacer a las grandes empresas.

El resultado de la investigación «Manos limpias» fue devastador para la clase política italiana y para la gran industria, porque fueron sorprendidos todos los partidos que han venido gobernando durante muchos años el país y todos los grandes complejos industriales, comenzando por FIAT. El 1 de abril de 1993 la magistratura italiana había dictado 1.356 órdenes de prisión y enviado 1.116 notificaciones de garantía (con la notificación de garantía se comunica a una persona que se le ha abierto una investigación judicial). Todo esto afectaba a 152 parlamentarios, 852 administradores regionales, provinciales y municipales, 1.487 contratistas y funcionarios. Todos los jefes de los partidos en el Gobierno (A. Forlani de la DC, B. Craxi del PSI, C. Cariglia del PSDI, G. la Malfa del PRI, R. Altissimo del PLI) recibieron una o varias notificaciones de garantía. Los investigados de la DC eran 465, los del PSI 288, los del PDS 71, los del

PSDI 39, los del PRI 31, los del PLI 20. Quedaban también sometidos a investigación todos los grandes grupos industriales (IRTI, FIAT, Ferruzzi, ENI, Lodigiani, Pesenti, Ligresti) y las grandes compañías públicas (ENEL y ANAS).

Los dos partidos más seriamente afectados fueron el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Todos los personajes más importantes y representativos del PSI —comenzando por B. Craxi, a quien se le acusa de corrupción y violación de la ley de financiación de los partidos— fueron sometidos a investigación y tuvieron que presentar la dimisión de sus cargos de Gobierno o de partido. En el vértice del partido B. Craxi fue sustituido por G. Benvenuto, que durante muchos años había sido secretario de la UIL (*Unione Italiana del Lavoro*), el tercer sindicato italiano en orden de importancia. El golpe para el PSI fue tan duro que se llegó a temer su desaparición de la escena política italiana. Pero más terrible fue la suerte de la Democracia Cristiana. Muchos de sus hombres fueron acusados de corrupción y financiación ilegal del partido. Pero no sólo esto. Algunos personajes entre los más representativos de la DC (G. Andreotti, siete veces presidente del Consejo y presente en el Gobierno durante casi 50 años con diversos cometidos; A. Gava, hasta hace poco ministro de Interior; R. Misas, muchas veces ministro), han sido acusados de haber tenido relación con organizaciones mafiosas y de haberles favorecido. Eran acusaciones que los jueces hacían basándose en revelaciones hechas por mafiosos «arrepentidos» sin verificación objetiva. Sin embargo, el solo hecho de que los jueces las hubiesen considerado como hipótesis y hecho objeto de notificaciones de garantía constituía para la DC una gravísima descalificación ante la opinión pública.

La situación italiana la víspera del 18 de abril

ASÍ, la situación italiana la víspera del 18 de abril se presentaba bastante difícil en un triple aspecto.

En primer lugar el aspecto político-institucional, a causa sobre todo de la tempestad de «Manos limpias» que se había abatido sobre el Parlamento, el Gobierno y los partidos. El hecho de que más de 150 parlamentarios se encontrasen bajo investigación constituía a los ojos de la gente una especie de deslegitimación del Parlamento tanto más cuanto que éste no había sido capaz de hacer ninguna reforma institucional excepto las

que se referían a la elección directa de los alcaldes de las comunidades locales. Por su parte el Gobierno, presidido por G. Amato, había ido perdiendo por el camino siete ministros, objeto de notificaciones de garantía, y a pesar de su esfuerzo por sanear la economía y combatir la pillería no había podido conseguir mucho, al carecer de una base parlamentaria suficientemente amplia y sólida. En cuanto a los partidos, habían alcanzado el índice más bajo de la estima popular: las acusaciones más graves que se les dirigían eran de partitocracia, intrigas en los negocios y corrupción. Se les acusaba de haber «ocupado» para su propia ventaja todas las instituciones y la administración del Estado hasta convertirse en los «amos» (partitocracia): de haberse servido de los bienes del Estado para enriquecerse a sí mismos y crearse amplias clientelas, para conseguir los votos en el momento de las elecciones.

En segundo lugar, la situación era difícil desde el punto de vista económico. La acción de la magistratura había provocado un duro frenazo en la vida económica del país: muchas obras públicas de gran envergadura con un costo de billones de liras habían quedado sin terminar. Como muchos constructores estaban sometidos a investigación, se habían cerrado muchas canteras. Las regiones, las provincias y las comunidades locales, con miedo a ser investigadas por contratas adjudicadas a empresas que habían pagado tangentes para conseguir las, no convocaban concursos para nuevas adjudicaciones. Este frenazo produjo un fuerte aumento del paro ya bastante alto con motivo de la recesión económica, haciendo pasar la tasa de paro del 10,9 por 100 de 1991 al 11,6 por 100. Era toda la economía italiana en realidad la que se encontraba en un momento muy difícil, tanto que la lira se veía obligada a abandonar el Sistema Monetario Europeo (SME) y se había depreciado mucho frente al marco alemán y al dólar. El déficit del sector estatal era de 167 billones de liras y el déficit público total, en torno a los 1.699 billones de liras, superaba el Producto Interior Bruto (PIB) que era de 1.520 billones de liras. Esta situación hacía muy problemático el cumplimiento de las condiciones que el Tratado de Maastricht ha puesto para la participación en la Unión Monetaria Europea (UEM).

En tercer lugar, la situación italiana se presentaba difícil en el aspecto de la lucha contra la criminalidad organizada. En este problema, del cual se habla mucho en el extranjero —¿quién no sabe todavía que a Italia se la define como el «País de la Mafia?»— pero que se conoce poco en su verdadera naturaleza, quisiéramos detenernos con una cierta amplitud.

La delincuencia organizada en Italia

COMO es sabido, la delincuencia en el mundo de hoy es de dos tipos: la no organizada y la organizada, mucho más peligrosa que la anterior. Por lo que se refiere a la no organizada el número de delitos en Italia no se destaca del de otros países europeos que tienen el mismo número de habitantes. Así, por ejemplo, en cuanto al número de homicidios, el número total de los que se cometen en Italia es inferior al de los cometidos en otros países como Alemania o Francia. Sin embargo, el auténtico problema de Italia es el de la delincuencia organizada, presente desde hace muchísimo tiempo sólo en tres regiones de la Italia meridional (la *mafia* en Sicilia, la *camorra* en Campania y la *'ndrangheta* en Calabria) pero que tiende a extenderse a otras regiones como la Puglia, donde ha tomado el nombre de *Sacra Corona Unita* y, sobre todo, en las grandes ciudades del Norte (Milán, Turín) y del Centro (Roma).

Lo específico de esta forma de delincuencia es que está perfecta y rígidamente organizada, con jefes reconocidos y temidos, con reglas severísimas, a las cuales no se puede contravenir sino bajo pena de muerte. Cuantos forman parte de la organización están obligados a un rigurosísimo secreto, obligados a ayudarse mutuamente y se encuentran en todas las circunstancias bajo la protección de la organización. Así, la *mafia* siciliana está dividida en «familias», cada una de las cuales controla un cierto territorio. A la «familia» se afilia uno después de haber dado pruebas de coraje y sangre fría para ir realizando delitos cada vez más graves hasta llegar al homicidio. La afiliación se realiza mediante un rito particular que incluye un juramento que, si no se cumple, acarrea la propia muerte. Con la afiliación a una «familia» se convierte uno en «hombre de honor». Los jefes de las «familias» se reúnen para decidir lo que hay que hacer. Y todos están obligados a cumplir las decisiones tomadas. A la cabeza de toda la organización mafiosa —llamada *Cosa nostra*— existe una cúpula que decide las intervenciones más importantes, por ejemplo el asesinato de un magistrado, de un político o de un alto oficial de la policía y tiene contactos con la mafia de otros países, en particular con la *Cosa nostra* de Estados Unidos, formada por personas de origen siciliano. Según una investigación del Arma de Carabineros, actualizada hasta el 31 de enero de 1990, en Sicilia hay 142 familias y 3.564 afiliados.

Es esta criminalidad organizada la que controla el tráfico y la dis-

tribución de la droga, no sólo en Italia sino también en Europa y en América. Además, la mafia siciliana está aliada con la mafia china, con la mafia turca y con la mafia de los países asiáticos para la adquisición de sustancias estupefacientes del «triángulo de oro» y con las organizaciones mafiosas de América Central (en particular con la mafia colombiana) para la adquisición de cocaína. El dinero ganado con la droga —se habla de 30 billones de liras— es «blanqueado» en algunos bancos complacientes y «reciclado» en operaciones industriales y comerciales perfectamente legales.

Pero el tráfico y la distribución de la droga no es la única fuente de riqueza para la delincuencia organizada: la mafia, la camorra y la 'ndrangheta no sólo consiguen una buena parte de las adjudicaciones de obras públicas, sino que en la zona de su dominio practican el «pizzo», es decir, imponen a todos los empresarios y comerciantes el pago de una «tangente» (una cierta suma de dinero todos los meses). Si se niegan a hacerlo, sus negocios o fábricas son objeto de atentados, incendios o incluso son destruidos y a ellos se les amenaza a muerte. Si se mantienen en su negativa a pagar, son asesinados.

La fuerza de estas organizaciones criminales que, aun estando localizadas en una zona pequeña de Italia, constituyen una multinacional del crimen, reside en la «solidaridad», esto es, en el hecho de que todos «callan» en todo lo referente a la mafia o a la camorra. Incluso cuando se trata de delitos cometidos en presencia de muchas personas, nadie «ha visto» ni «ha oído» nada. Nadie ha visto a los *killer* que han matado en su presencia a una persona ni ha oído disparos. El motivo de este silencio —que a quien no es siciliano o calabrés o napolitano parece incomprensible y cómplice— estriba en que quien habla o incluso únicamente manifiesta saber algo y el que acusa a un mafioso ante un tribunal o atestigua contra él es asesinado, él y sus familiares. Esta es una regla absoluta de la mafia que se cumple hasta tal punto que, cuando la mafia decide matar a una persona, junto con la persona señalada se mata también a todos aquellos —incluso niños— que por casualidad se encuentren en el lugar del crimen y pudiesen ser testigos en contra de los mafiosos. Por este motivo los procesos de la mafia son muy difíciles y a menudo se concluyen con la absolución de los mafiosos culpables de muchos homicidios porque no hay pruebas contra ellos —la mafia no deja rastro de sus delitos— y no hay testimonios ni personas que se presenten a los tribunales para declarar en contra de los mafiosos. Por el mismo motivo resulta muy

difícil descubrir a los culpables de los delitos cometidos por las organizaciones criminales.

Durante muchos años el Estado italiano ha sido no sólo impotente sino que ha sufrido graves derrotas en la lucha contra el crimen organizado: no sólo no ha logrado quitar a la mafia el control del territorio sino que han sido asesinados muchos magistrados y oficiales de las fuerzas del orden y sus escoltas, empeñados en la lucha contra la mafia. Los delitos más graves se han perpetrado en 1992 con el asesinato de los magistrados F. Falcone y P. Borsellino. Pero también en 1992 ha habido la más fuerte reacción del Estado: han sido enviados a Sicilia unidades del Ejército (cerca de 7.000 hombres) con labores policiales, a fin de dejar libres a la Policía y a los carabinieri para dedicarse a la investigación; ha sido creada la Dirección Nacional Antimafia, que coordina la lucha contra el crimen organizado en todo el país; se ha publicado un decreto especial antimafia con penas más severas para los mafiosos.

Con todo, la contribución más eficaz en la lucha contra la mafia la han proporcionado algunos mafiosos «arrepentidos», es decir, mafiosos que habiendo estado implicados en la lucha interna de varias «familias» y después destinados a ser matados por la mafia vencedora, han preferido entregarse a sí mismos y a sus familias a la protección del Estado: en cambio de esta protección, que les asegura su incolumidad y los medios para vivir ellos y sus familias, los mafiosos vencidos han decidido «arrepentirse», es decir, salirse de la mafia y, sobre todo, revelar tanto la estructura y los secretos de la mafia como los nombres de las personas que pertenecen a ella y de los autores de delitos en el pasado. De este modo, por vez primera, ha podido darse un conocimiento «interno» de la mafia y se ha podido proceder a la detención de muchos mafiosos importantes. La detención más clamorosa ocurrió el 15 de enero de 1993 en Palermo, cuando fue capturado Totó (Salvador) Riina, considerado el jefe de los jefes de *Cosa nostra*, escondido durante más de veinte años y autor y responsable de un número impresionante de asesinatos.

Ciertamente, la lucha contra el crimen organizado en Italia no ha terminado; más aún, podría ocurrir que la mafia cometa delitos todavía más clamorosos para afirmar su poder, ya que muchos grandes mafiosos están aún ocultos y una nueva generación mafiosa, no menos terrible que la antigua, gravemente diezmada, podría tomar su lugar. Con todo, por vez primera, el frente extremadamente compacto e impenetrable de la

mafia ha sido roto, siendo más de 200 los «arrepentidos» que han abandonado la mafia y están dispuestos a «hablar».

Italia, hacia un nuevo sistema político

HE dicho que el 18 de abril los italianos han expresado el deseo de un cambio radical en el actual sistema político, que elimine, mediante una gran reforma electoral e institucional, los defectos más graves del mismo, que son la partitocracia y la ausencia de un Gobierno fuerte y estable. De hecho, lo que los italianos piden es que se ponga fin al excesivo poder y a la excesiva presencia de los partidos, que amenazan condicionar toda la vida del país, y se den a Italia gobiernos estables y con autoridad. En realidad, desde la postguerra hasta hoy, más de cincuenta gobiernos se han ido sucediendo en la guía del país, y tanto su vida como su acción han dependido largamente de la voluntad y de los avatares internos de los partidos que los formaban y apoyaban, hasta el punto de que los auténticos detentadores del poder eran los secretarios de los partidos en el Gobierno.

Con todo, el defecto más grave del antiguo sistema político italiano era la práctica imposibilidad del recambio de la clase política en el poder, por lo cual la democracia italiana ha sido una democracia «incompleta», «bloqueada». Esto ha ocurrido por el hecho de que la minoría en la oposición nunca ha podido convertirse en mayoría. El motivo ha sido que la oposición estaba principalmente constituida por el Partido Comunista Italiano. Ahora bien, este partido no podía llegar a la mayoría y gobernar el país sea por motivos de orden internacional —por estar el PCI ligado a la URSS, mientras Italia pertenecía al bloque occidental—, sea por motivos internos, dado que la Democracia Cristiana ha sido durante cincuenta años el partido de la mayoría relativa y ha constituido con otros partidos laicos o socialistas un bloque de fuerzas tal que tenía la mayoría absoluta de los votos y, por tanto, el derecho de gobernar el país. Esta permanencia larguísima de la Democracia Cristiana en el poder ha hecho que Italia haya sido el país más inestable y más estable de Europa occidental: más inestable por el cambio continuo de los gobiernos; más estable porque la misma clase política se ha mantenido en el poder durante cincuenta años, hecho jamás ocurrido en la Europa de la postguerra.

Ahora bien, la situación ha cambiado profundamente. La mayoría que ha gobernado hasta ahora el país ya no existe. Los partidos que la

formaban están todos en crisis. La Democracia Cristiana, a la cual deben reconocerse grandes méritos, porque ha impedido que Italia se convierta en un satélite de la URSS, ha reconstruido el país destruido en la guerra, ha consolidado el sistema democrático, ha encauzado y realizado el renacimiento del Mediodía y ha hecho de Italia un país próspero como nunca lo había sido en el pasado, por su larga permanencia en el poder se ha empobrecido y vaciado de su carga ideal y ha perdido poco a poco parte del consenso de los italianos, descendiendo por debajo del 30 por 100 (o quizás sea menos del 25 por 100) de los votos. El Partido Socialista, desde hace treinta años aliado de la Democracia Cristiana, después de haber conseguido grandes éxitos bajo la guía de B. Craxi, tras el escándalo de las «tangentes» ha entrado en una crisis tan grave que podría significar su fin. También los partidos menores —socialdemócratas, republicanos y liberales— aliados de la DC están reducidos al mínimo.

Por su parte, tampoco el frente de la oposición se halla en mejores condiciones. El Partido Comunista Italiano, que era el partido comunista más fuerte de Occidente, ha desaparecido, o mejor, de él han nacido dos nuevas formaciones políticas: el Partido Democrático de la Izquierda, que quiere ser un partido de izquierda, progresista y reformador, pero no marxista ni comunista (a la antigua usanza); y Refundación Comunista, que quiere mantenerse fiel, teórica y prácticamente, al viejo comunismo marxista. Estas dos formaciones políticas están en fuerte oposición y se disputan el voto de los electores del antiguo Partido Comunista. Actualmente, Refundación Comunista está creciendo: señal de que en Italia aún quedan personas que sueñan el retorno del comunismo, aunque sea renovado (pero ¿cómo?).

Pero mientras los viejos partidos están en crisis, en el panorama político italiano se presentan nuevas fuerzas. Hace algunos años las nuevas fuerzas estaban representadas por los Radicales y los Verdes; pero su éxito ha sido modesto y actualmente su peso político es escaso. En cambio, la verdadera fuerza nueva está representada por la Liga del Norte, del senador Umberto Bossi.

Se trata de una formación política que recoge las clases medias y los pequeños y medianos empresarios de Lombardía, del Véneto y del Piamonte (es decir, la parte más rica y más desarrollada del país) que están descontentos del superpoder de los partidos y del modo como el gobierno central administra las riquezas producidas en el Norte: según ellos, en lugar de emplear las riquezas producidas por el Norte en beneficio de las

poblaciones septentrionales, Roma «ladrona» las disfruta en su propio beneficio y las derrocha en beneficio de las poblaciones meridionales, del Sur «parásito». Por eso, la Liga Norte tiene como programa la división de Italia en tres «Macroregiones» (Norte, Centro y Sur), federadas entre sí, a fin de evitar que las riquezas producidas por el Norte terminen en Roma o en el Sur. Actualmente, la Liga Norte, captando votos de la Democracia Cristiana, espera convertirse en el primer partido del Norte y llevar al Parlamento nacional un elevado número de parlamentarios, capaces de determinar la política nacional. Sólo que, al menos actualmente, la Liga Norte carece de personal político preparado para poder asumir responsabilidades de gobierno.

Otras dos fuerzas nuevas del panorama político italiano están constituidas por la Red, de L. Orlando y por los Populares para la Reforma, de M. Segni. Orlando, actualmente alcalde de Palermo, y Segni se han separado de la Democracia Cristiana, considerándola un partido acabado, incapaz de renovarse, y han dado vida a dos formaciones políticas que deberán entrar a formar parte de formaciones políticas más amplias. Así, los Populares por la Reforma deberán formar parte de un grupo político llamado Alianza Democrática, en el cual deberá confluir el Partido Republicano, los socialistas que siguen a C. Martelli, ex ministro de Justicia, que ha abandonado el Partido Socialista, y otros grupos menores. Es difícil decir qué éxito tendrán en el futuro estas nuevas formaciones políticas. Lo que es cierto es que ofrecen un panorama político italiano más variado, pero también menos descifrable y menos comprensible.

La salida de Orlando y de Segni de la Democracia Cristiana ha hecho ciertamente más crítica la situación de este partido, ya en grave crisis a causa de la investigación judicial contra sus hombres más representativos. También se debe destacar que actualmente la Democracia Cristiana, bajo el empuje de su nuevo secretario, M. Matinazzoli, está realizando una renovación, que debería cambiarle la estructura, el programa y quizá también el nombre. Es un trabajo difícil; pero si esta tentativa de «refundación» lograra salir adelante la Democracia Cristiana podría reemprender su papel de «partido líder» que ha jugado hasta ahora en Italia.

Nuevas perspectivas de futuro

CON el 18 de abril, aunque sea tímidamente, se ha iniciado una nueva época en la vida política italiana. Eviden-

temente, estamos todavía al comienzo y la herencia del pasado se hace sentir aún pesadamente. Pero, por una parte, hay novedades considerables respecto al pasado; de otra, el camino de los próximos meses está claramente señalizado. La primera novedad atañe a la formación del nuevo gobierno. Hasta ahora el gobierno siempre ha sido la expresión de los partidos: el Jefe del Estado escogía al presidente del Consejo de Ministros entre las personas indicadas por los partidos de la mayoría; el presidente del Consejo designado discutía con los partidos de la mayoría el programa de gobierno y, para la formación del mismo, elegía los ministros entre un abanico de nombres que le presentaban los partidos; por tal motivo, los ministros pertenecientes a un partido formaban la «delegación del partido X o Y en el gobierno». Eran, pues, los partidos de la mayoría los que en el Parlamento daban la confianza al gobierno y lo sostenían en su acción. Después del 18 de abril las cosas han cambiado: el presidente de la República, O. L. Scalfaro, tras haber consultado a los partidos, ha elegido como presidente del Consejo a un hombre del todo ajeno a los partidos y ni siquiera parlamentario, C. A. Ciampi, gobernador del Banco de Italia; a su vez Ciampi ha elegido los ministros únicamente basado en su competencia sin previo acuerdo con los partidos.

El segundo hecho nuevo, que pondrá fin a la partitocracia, es la venta a los particulares, italianos o extranjeros, de las grandes empresas públicas que, nacidas para asegurar la participación del Estado en el desarrollo industrial de Italia, con el tiempo han llegado a ser «propiedad» de los partidos en el gobierno y, por consiguiente, centros de poder y fuente de financiación de tales partidos.

Pero el hecho que revolucionará profundamente la vida política italiana ocurrirá el próximo octubre, cuando se vote para un nuevo Parlamento con una ley electoral no ya proporcional, sino mayoritaria uninominal. Siempre que se consiga seguir el itinerario que el presidente Scalfaro ha señalado al nuevo gobierno: aprobación en junio de una nueva ley electoral; disolución del Parlamento y convocatoria de elecciones en julio; nuevas elecciones políticas en octubre o noviembre. El camino para el futuro de Italia está, pues, señalado. Resta sólo desear que sea un futuro del cual desaparezcan las sombras que hoy gravitan sobre la situación política italiana.